



REPORTE

Crimen Organizado y Terrorismo en la Latinoamérica

Febrero, 2026

Cristian Rodríguez

Especialista en Criminología Aplicada contra el Terrorismo

CNT | Centro Nacional
de Estudios sobre el
Terrorismo y su
Financiamiento



Mensaje Institucional

El Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT) presenta el Reporte Mensual: Crimen Organizado y Terrorismo en Latinoamérica — Febrero 2026, como parte de una serie periódica de análisis estratégico que el Centro emitirá de manera continua.

Esta línea de informes responde a la necesidad de comprender y anticipar la creciente convergencia entre delincuencia organizada y dinámicas de tipo terrorista en la región. Cada edición está concebida como un instrumento de seguridad e inteligencia aplicada, orientado a fortalecer la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y el desarrollo de capacidades institucionales.

Con esta iniciativa, el CNT reafirma su compromiso de generar conocimiento especializado, oportuno y accionable para enfrentar las amenazas híbridas que impactan a México y América Latina.

República de Chile, Santiago

Contenido

Reporte Febrero, 2026 | Crimen Organizado y Terrorismo en la Latinoamérica:

México: Golpe al CJNG, Narcoviolencia y Tácticas de Terror 1

Colombia: Disidencias Híbridas y “Paz Total” Bajo Fuego..... 2

Venezuela: Expansión del *Tren de Aragua*..... 3

Ecuador: Narcoviolencia Emergente y *Guerra Psicológica*..... 4

Brasil: Facciones Diversificadas y Cooperación Regional en Seguridad 5

Chile: Auge de *Bandas Importadas* y Respuesta Institucional..... 5

Perú: Narcoterror Remanente y Nuevas Mafias Transnacionales 6

Conclusiones 7

Prospectiva Estratégica 8

Bibliografía 10

Resumen Ejecutivo

Durante el mes de febrero de 2026, América Latina enfrentó un panorama de seguridad complejo y sin precedentes, marcado por numerosos episodios de violencia vinculados al crimen organizado y actos con características terroristas distribuidos por la región. Las organizaciones criminales transnacionales han evolucionado más allá de sus roles tradicionales (narcotráfico, extorsión) para convertirse en actores subestatales con agendas propias, desafiando la soberanía de naciones enteras. Estos grupos —cárteles, pandillas carcelarias y remanentes insurgentes— adoptan tácticas propias del terrorismo y la insurgencia para aterrorizar a la población y doblegar a las autoridades, en una peligrosa convergencia crimen—terrorismo que afecta a varios países de la región. A continuación, se presenta un análisis de los eventos más destacados ocurridos en febrero de 2026, organizado por país, complementado con las tendencias regionales identificadas, seguido de conclusiones y una perspectiva estratégica.



México: Golpe al CJNG, Narcoviolencia y Tácticas de Terror

Escalada de violencia en Sinaloa: Al inicio de 2026, México ya vivía un incremento de la violencia ligada al crimen organizado. En los últimos días de enero, el estado de Sinaloa fue escenario de un ataque inédito contra representantes políticos: el 28 de enero, un comando de la facción de “*Los Chapitos*” (Cártel de Sinaloa) emboscó con rifles automáticos el vehículo de dos diputados locales en Culiacán, dejándolos gravemente heridos. Este atentado armado, dirigido a funcionarios electos en plena zona urbana, rompió un tabú histórico –los cárteles rara vez atacaban a autoridades de alto perfil en ciudades– y fue interpretado como una táctica de “terrorismo narcocriminal”: un mensaje sangriento para infundir miedo y demostrar su poder tanto al gobierno estatal como a facciones rivales. En respuesta, el 30 de enero el gobierno federal de Claudia Sheinbaum ordenó la Operación “Murciélago”, desplegando más de 1.500 soldados y fuerzas especiales en Sinaloa para recuperar el control territorial de las zonas bajo asedio. Este operativo –apoyado por la Guardia Nacional y con asistencia de inteligencia de EE.UU.– supuso una intensa militarización del estado: columnas blindadas patrullando Culiacán y otras ciudades, operativos de cacería de líderes criminales y puntos de control en carreteras. Si bien la presencia militar logró estabilizar momentáneamente las principales urbes, expertos advirtieron que esta ofensiva podría fragmentar aún más a los cárteles, creando nuevas células más violentas y difíciles de contener, un riesgo latente de “efecto hidra” tras golpear a los cabecillas.

Golpe histórico al CJNG y revuelta narco: La violencia en México alcanzó un punto culminante a finales de febrero con un golpe sin precedentes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El domingo 22 de febrero de 2026, en un operativo conjunto de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder histórico del CJNG y considerado el narcotraficante más peligroso del mundo. El líder, con más de 30 años de carrera criminal y buscado internacionalmente (EE.UU. ofrecía USD 15 millones por su captura), resultó herido de gravedad en un enfrentamiento en la sierra de Tapalpa (Jalisco) y murió mientras era trasladado en helicóptero a la Ciudad de México. La muerte de “El Mencho” –quien tenía presencia criminal en 25 de los 32 estados de México y encabezaba la principal organización proveedora de fentanilo hacia EE.UU.– fue celebrada como el mayor golpe al narcotráfico en años por los gobiernos de México y EE.UU., pero desató de inmediato una furiosa reacción de su cártel.

Horas después de confirmarse la caída de *El Mencho*, el CJNG ejecutó un plan de represalia con una ola de violencia coordinada y simultánea en múltiples estados. Se registraron narcobloqueos masivos: los sicarios atravesaron e incendiaron vehículos en carreteras, provocando cortes viales, y realizaron disparos y ataques incendiarios contra negocios y bienes civiles en varias regiones a la vez. La jornada se tornó caótica en al menos siete estados (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas), e incluso algunos reportes mencionaron hasta 10 entidades afectadas extendiendo el caos a Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y Guerrero. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el área metropolitana, paralizando la actividad cotidiana.

La violencia llegó también a destinos turísticos: en Puerto Vallarta (Jalisco) se observaron columnas de humo cerca del aeropuerto y cundió el pánico entre los viajeros, al punto de que la aerolínea Air Canada suspendió sus vuelos a esa ciudad citando la “situación de seguridad en curso”. Ante la magnitud de los disturbios, la Embajada de EE.UU. emitió una alerta formal instando a los ciudadanos estadounidenses en amplias zonas de México a refugiarse y no viajar, mientras que las autoridades de Jalisco activaron el “Código Rojo” para proteger a la población civil. En estados como Michoacán y Guanajuato se suspendieron los servicios de transporte público y el funcionamiento de terminales de autobuses, y se reportaron incendios de farmacias y tiendas de conveniencia en varias localidades. En el norte, Tamaulipas también sufrió bloqueos con vehículos calcinados en sus carreteras troncales, mientras que en Colima y Nayarit medios locales informaron de incendios provocados en calles y negocios, aunque algunas de estas versiones aún debían ser confirmadas por las autoridades. Esta revuelta narco generalizada –que no se veía en tal escala desde las represalias de 2019 y 2023 tras operativos contra capos en Sinaloa– demostró que, pese a la pérdida de su líder, el CJNG conservó la capacidad de provocar un caos multiestatal para intentar forzar al gobierno a retroceder.



Innovaciones tácticas criminales: Los sucesos de febrero en México ilustran cómo los cárteles locales han adoptado tácticas de guerra no convencionales, acercándose a un poder de combate cuasi insurgente. A mediados de enero de 2026, en la región de Tierra Caliente (Michoacán), se documentó que el CJNG empleó enjambres de drones FPV armados con explosivos C-4 para emboscar convoyes militares, logrando dañar vehículos blindados y dejando varios soldados heridos. El 13 de enero, por ejemplo, un convoy del Ejército fue atacado en el municipio de Apatzingán con una combinación de minas terrestres detonadas a distancia y drones kamikaze, obligando a las fuerzas a replegarse. Estas tácticas de “guerra híbrida” –que recuerdan escenarios de conflictos en Medio Oriente o Ucrania– señalan que los cárteles mexicanos están aplicando una estrategia de negación de acceso: impiden o dificultan la entrada de las autoridades a sus zonas dominadas mediante el uso de artefactos explosivos de control remoto y ataques aéreos improvisados. El impacto psicológico de estos métodos es enorme: tanto soldados como pobladores viven con el temor constante de que “un dron asesino pueda aparecer en el cielo en cualquier momento”, generando pánico e intimidando a comunidades enteras sin ni siquiera necesidad de un enfrentamiento directo. Frente a esta amenaza, el gobierno mexicano anunció a finales de febrero la aceleración en la adquisición y despliegue de sistemas antidrones e inhibidores electrónicos –como rifles antimaterial y bloqueadores de señal– reconociendo que la brecha tecnológica se ha estrechado peligrosamente a favor de los cárteles. De hecho, analistas de seguridad señalan que las organizaciones criminales están integrando expertos, adquiriendo armamento de grado militar y adaptando técnicas aprendidas en conflictos globales (por ejemplo, la guerra urbana y el uso de IA) de forma más rápida que la capacidad de reacción de las burocracias estatales.

La “máquina del terror” del CJNG: El Cartel de Jalisco Nueva Generación, en particular, ha sido emblemático en converger prácticas criminales con tácticas terroristas de alta intensidad. Por años, bajo el mando de *El Mencho*, el CJNG funcionó “como un ejército irregular con una potencia de fuego militar”, utilizando la violencia extrema y teatral como arma estratégica. Sus métodos incluyeron ejecuciones filmadas (decapitaciones y torturas difundidas en video) para sembrar el terror, cuerpos desmembrados exhibidos en lugares públicos acompañados de narcomantas amenazantes, y fosas clandestinas con decenas de cadáveres disueltos en ácido –técnica macabra para desaparecer a víctimas a gran escala–. Además, el CJNG innovó en el uso de “narcotankes” (vehículos artesanales blindados con acero, equipados con torretas) y la introducción de drones armados con explosivos como táctica de combate, capacidades que más tarde otros grupos criminales trataron de emular. Durante el operativo final contra *El Mencho*, las autoridades comprobaron que sus sicarios disponían incluso de lanzacohetes tierra-aire de uso militar –con los que ya habían derribado un helicóptero del Ejército en 2015–, prueba del poderío bélico alcanzado por esta organización y de la debilidad de muchas policías locales frente a semejante arsenal. En suma, los eventos de febrero mostraron que el CJNG y otros cárteles en México no solo buscan lucro delictivo, sino que recurren a tácticas terroristas e insurgentes para mantener su hegemonía criminal, retar al Estado y controlar vastos territorios, evidenciando la peligrosa hibridación entre crimen organizado y terrorismo en el país.

Colombia: Disidencias Híbridas y “Paz Total” Bajo Fuego

Ataques en medio de un cese al fuego parcial: En Colombia, a pesar de la política gubernamental de “Paz Total” promovida por el presidente Gustavo Petro, la seguridad siguió precaria en varias regiones durante febrero de 2026 debido a las acciones de guerrillas y bandas criminales. Un cese al fuego bilateral con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) vigente desde agosto de 2025 redujo la frecuencia de enfrentamientos con esa guerrilla, pero la tregua parcial dejó fuera a grupos disidentes de las FARC (que rechazaron el acuerdo de paz de 2016) y a otras estructuras, las cuales mantuvieron una alta capacidad de violencia. En consecuencia, se registraron varios atentados con explosivos y emboscadas. Por ejemplo, a inicios de febrero se reportaron detonaciones simultáneas en la ciudad fronteriza de Cúcuta, que dejaron al menos seis heridos; si bien ningún grupo se atribuyó estos actos, autoridades locales señalaron al ELN como el principal sospechoso debido a su histórica presencia en la zona. Asimismo, las disidencias de las FARC intensificaron sus operaciones ofensivas: a finales de enero, un carro-bomba estalló junto a la estación de Policía del municipio de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca, dejando ocho uniformados heridos y daños materiales considerables (el ataque fue atribuido a la columna móvil “Dagoberto Ramos”). Estos incidentes subrayan la persistente capacidad terrorista

de los grupos armados posdesmovilización, que combinan la retórica política de rebeldía con el control de economías ilícitas (tráfico de cocaína, minería ilegal) para sostener su lucha violenta.

Convergencia crimen-subversión y violencia política: Colombia enfrenta una preocupante superposición entre criminalidad organizada y subversión insurgente. Por un lado, bandas mafiosas de origen paramilitar, como el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), continúan actuando con métodos terroristas para consolidar su dominio en regiones del Caribe y el Pacífico: emplean extorsiones masivas, amenazas colectivas y paros armados que han paralizado departamentos enteros, además de perpetrar ataques con explosivos contra estaciones de Policía y convoyes militares. Por otro lado, la violencia política mantiene altos niveles: Colombia cerró 2025 con cerca de 12.800 homicidios (tasa aproximada de 25 por 100.000 habitantes), en parte debido a masacres rurales y asesinatos selectivos ligados tanto a la criminalidad como a conflictos de poder local. Un hecho que marcó este período fue el *magnicidio* del senador Miguel Uribe Turbay: luego de haber sido baleado en Bogotá en diciembre de 2025, el político —quien era precandidato presidencial— falleció a principios de febrero de 2026 tras casi dos meses de agonía. Este asesinato de tan alto perfil, atribuido por investigadores a sicarios posiblemente contratados por sectores del narcotráfico, conmocionó al país por ser el primer magnicidio de un aspirante presidencial en décadas y evidenció la persistencia de amenazas letales contra figuras públicas. El gobierno se vio obligado a reforzar la seguridad para las campañas electorales de 2026 ante el temor de nuevos atentados políticos.

En síntesis, a pesar de los esfuerzos de paz, Colombia vivió en febrero de 2026 una paradoja de diálogos y violencia paralela: mientras el Ejecutivo negociaba treguas con grupos armados como el ELN, otros actores —sean disidencias de las FARC o redes criminales de origen paramilitar— continuaron asesinando líderes sociales, hostigando poblaciones rurales e incluso desafiando directamente al poder estatal con ataques terroristas selectivos. La convergencia entre el crimen organizado y la insurgencia se hizo más clara que nunca: facciones guerrilleras financiadas por el narcotráfico, y narcos que buscan control territorial a sangre y fuego, han creado un círculo vicioso que pone en jaque la gobernabilidad en varias zonas de la geografía colombiana.

Venezuela: Expansión del *Tren de Aragua*

Crimen híbrido: En Venezuela, la línea divisoria entre el Estado y el crimen organizado es cada vez más borrosa, dando lugar a lo que especialistas denominan un “Estado mafioso” o criminalizado. Altos funcionarios gubernamentales y militares han sido señalados por su presunta complicidad con actividades ilícitas a gran escala, como el Cartel de los Soles, la red de oficiales castrenses supuestamente involucrados en el tráfico de drogas desde territorio venezolano. En este contexto de colapso institucional y corrupción endémica, la megabanda Tren de Aragua (TdA) se ha convertido en el emblema de la convergencia crimen-terror en Venezuela. Nacida como una pandilla carcelaria hace aproximadamente una década, esta organización ha evolucionado en un grupo criminal transnacional con presencia activa en varios países de Sudamérica (principalmente Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros) y actividades delictivas reportadas hasta en Estados Unidos. El TdA combina un amplio abanico de actividades —extorsión, sicariato, narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, contrabando de oro— y ha sido acusado de explotar la diáspora venezolana mediante redes de tráfico de migrantes, en algunos casos actuando con la tolerancia o complicidad de autoridades venezolanas.

Designación terrorista y presión internacional: La amenaza que supone el *Tren de Aragua* alcanzó tal magnitud que en febrero de 2026 trascendió las fronteras venezolanas y motivó acciones coordinadas de la comunidad internacional. El 20 de febrero de 2026, Estados Unidos designó oficialmente al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Esta medida sin precedentes para una banda latinoamericana —un estatus normalmente reservado a grupos yihadistas o insurgentes ideológicos— se argumentó señalando la participación del TdA en “guerra irregular, asesinatos, secuestros” y su alianza con elementos del Cartel de los Soles en actividades de narcotráfico y desestabilización regional. Paralelamente, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló en enero un megaproceso judicial contra 260 presuntos miembros y cabecillas del TdA por cargos federales de terrorismo, tráfico de personas y lavado de activos. Estas acciones reflejan la preocupación global



que despierta el TdA: se le atribuyen operaciones criminales y actos violentos que van desde la instigación de disturbios migratorios en fronteras sudamericanas hasta la comisión de asesinatos y secuestros en países vecinos.

Dentro de Venezuela, sin embargo, el panorama no mejora. El ex régimen de Nicolás Maduro sigue negando la gravedad del problema y, según denuncias de líderes opositores y ONGs, incluso utiliza indirectamente a grupos criminales como el TdA para sus fines –ya sea para perseguir a disidentes, obtener divisas por vías ilícitas o proyectar inestabilidad hacia otros países de la región–. Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos continúan atrapados entre violentas “zonas de paz” (territorios cedidos de facto a bandas armadas) y la represión estatal. Las regiones mineras del Arco del Orinoco, por ejemplo, están en manos de pranes (cabecillas criminales) y guerrilleros colombianos que explotan oro y coltán con total impunidad, imponiendo un régimen de terror laboral sobre comunidades mineras. Esta colusión entre el crimen organizado y actores estatales en Venezuela agrava la crisis humanitaria y de seguridad: la migración masiva sigue en aumento, los conflictos violentos afectan la frontera con Colombia e impactan a todo el Cono Sur, y Venezuela se ha convertido en un santuario para criminales internacionales, con ausencia casi total de estado de derecho. En resumen, febrero de 2026 muestra a Venezuela como un caso extremo de “Estado forajido” donde el crimen organizado y el terrorismo se entrelazan con el poder político, generando un foco de inestabilidad que trasciende las fronteras nacionales.

Ecuador: Narcoviolencia Emergente y Guerra Psicológica

Atentados terroristas y crisis carcelaria: Ecuador afronta una preocupante transformación de su panorama de seguridad, pues un país históricamente al margen del terrorismo político ha visto surgir en los últimos años violencia de estilo narcoterrorista ligada al auge del narcotráfico. Durante 2025 se produjo una serie inédita de atentados con coche-bomba en zonas urbanas: ciudades portuarias como Guayaquil (principal puerto) y la capital Quito fueron sacudidas por explosiones que dejaron muertos y heridos, ataques que el gobierno calificó formalmente de actos terroristas debido a su naturaleza indiscriminada y motivación coercitiva. Detrás de esta ola violenta estarían mafias locales con conexiones internacionales, como la banda conocida como Los Lobos (aliada del Cártel de Sinaloa), que buscaban presionar al Estado –exigiendo la liberación de cabecillas detenidos o la cancelación de extradiciones– mediante tácticas típicas de insurgentes y terroristas. Además, la crisis carcelaria se agudizó hasta niveles inéditos: masacres recurrentes entre reos de bandas rivales (con decapitaciones y asesinatos múltiples dentro de los penales) fueron utilizadas por los grupos criminales como herramienta de chantaje para forzar negociaciones con el gobierno o demostrar su poder, generando horror en la ciudadanía.

Desinformación y terror psicológico: En febrero de 2026, las organizaciones criminales ecuatorianas demostraron que podían aterrorizar a la población sin necesidad de detonar una sola bomba, mediante operaciones de guerra psicológica y desinformación. Un caso emblemático ocurrió a inicios de mes en la provincia de Manabí: se viralizó en WhatsApp y redes sociales un falso vídeo (deepfake) en el que supuestos altos mandos policiales anunciaban que la Policía se retiraría de ciertos barrios por considerarlos “incontrolables”. El video –elaborado con fragmentos de voz e imagen sintética de un comandante real– simulaba una declaración oficial que implícitamente dejaba esos sectores urbanos como “zonas liberadas” para el narco, generando pánico inmediato entre los comerciantes y vecinos de la localidad. Aunque horas más tarde la Policía Nacional desmintió públicamente esta información como falsa, el daño ya estaba hecho: durante días muchos negocios permanecieron cerrados por miedo, y la vida cotidiana de la comunidad quedó interrumpida. Este incidente evidenció la creciente capacidad de las bandas criminales para librar una guerra cognitiva, explotando las redes sociales y herramientas de inteligencia artificial para difundir rumores, sembrar confusión y minar la confianza en las autoridades. Las pandillas ecuatorianas manejan páginas de noticias “fake” y ejércitos de cuentas automatizadas que amplifican sus mensajes de terror, amenazan virtualmente a funcionarios y saturan el espacio informativo con versiones distorsionadas de la realidad. En respuesta, el gobierno ecuatoriano ha reforzado sus protocolos de ciberseguridad y contra-desinformación, colaborando con plataformas tecnológicas para identificar contenidos manipulados y clarificando información oficial tan pronto circulan estos bulos. No obstante, la velocidad y alcance de las “ciber-PSYOPS” criminales plantean un serio desafío: con recursos muy inferiores a los del Estado, las mafias logran a través del terror virtual paralizar comunidades y erosionar la percepción de seguridad, sumando una nueva dimensión a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.



Brasil: Facciones Diversificadas y Cooperación Regional en Seguridad

Megabandas en evolución y violencia persistente: En Brasil, las grandes facciones criminales nacidas en las cárceles –principalmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)– continuaron consolidando su dominio a lo largo de febrero de 2026, controlando tanto economías ilegales diversificadas (narcotráfico de cocaína y marihuana, tráfico de armas, contrabando de mercancías, extorsiones en favelas) como estructuras criminales dentro de prisiones y barrios marginales. Estas organizaciones, con decenas de miles de miembros, actúan casi como empresas del crimen: forjan alianzas, reparten territorios e inclusive cooperan entre sí cuando enfrentan amenazas comunes. Por ejemplo, durante 2025 se observó una insólita colaboración táctica entre rivales históricos –PCC y CV– para redistribuir rutas del narcotráfico tras operativos policiales, compartiendo cargas y protegiendo envíos en la frontera con Paraguay. Si bien Brasil logró en los últimos años una disminución progresiva de su tasa global de homicidios (tras el pico de 2017), en regiones con fuerte presencia de estas facciones la violencia sigue siendo alarmante. En febrero de 2026 continuaron reportándose enfrentamientos armados en favelas de Río de Janeiro (donde unidades policiales de élite como el BOPE actúan casi en operaciones de guerra urbana) y matanzas dentro de penales superpoblados disputados por el PCC y CV –con casos de decapitaciones y ejecuciones masivas de reclusos rivales que horrorizan a la opinión pública brasileña–. En la frontera Brasil-Paraguay, particularmente en el departamento paraguayo de Amambay, autoridades investigan la posibilidad de que grupos ligados al CV hayan utilizado drones armados para perpetrar un ataque contra una banda rival a inicios de 2026, siguiendo métodos ya vistos en México.

Respuesta del Estado y cooperación internacional: El gobierno brasileño, consciente de la naturaleza transnacional del crimen organizado, ha intensificado la cooperación regional y el intercambio de inteligencia. Durante 2025, fuerzas de seguridad brasileñas desmantelaron una red logística del PCC que pretendía usar drones para introducir armas en una prisión de máxima seguridad –lo que alertó sobre la creciente sofisticación tecnológica de estas bandas y llevó a reforzar las medidas de control en los penales–. En febrero de 2026, operativos conjuntos con Paraguay y Bolivia resultaron en la incautación de cargamentos récord de cocaína y marihuana en la región de la triple frontera, asestando golpes financieros importantes a las facciones. Adicionalmente, Brasil ha invertido en inteligencia digital para rastrear comunicaciones cifradas de los líderes del PCC y CV, muchos de los cuales operan desde la cárcel usando celulares de contrabando o redes clandestinas. No obstante, persisten grandes desafíos: la infiltración de la corrupción en las fuerzas del orden y el sistema político complica la efectividad de las acciones, y las facciones han mostrado resiliencia extraordinaria –por ejemplo, replegándose temporalmente para reducir la presión mediática, solo para resurgir luego en nuevos mercados o con tácticas diferentes–. El caso brasileño refleja una paradoja: aunque el país posee recursos e instituciones más robustas que muchos vecinos, la extensión y complejidad del crimen organizado nacional e internacional supera las capacidades tradicionales, obligando a Brasil a innovar en sus estrategias, desde reformas penitenciarias profundas hasta proyectos sociales en favelas para desarticular la base de apoyo de estas poderosas organizaciones criminales.

Chile: Auge de *Bandas Importadas* y Respuesta Institucional

Nuevas amenazas para un país en transición: Históricamente, Chile mantuvo niveles relativamente bajos de criminalidad organizada violenta en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, durante 2025–2026 se ha evidenciado un rápido aumento de bandas criminales extranjeras operando en Chile, lo que coloquialmente se denomina “crimen organizado importado”. Entre estas organizaciones destaca particularmente el ya mencionado Tren de Aragua, cuyos miembros han aprovechado la crisis migratoria venezolana para infiltrarse en comunidades de migrantes en Chile. La llegada del TdA y de otras pandillas foráneas (remanentes de cárteles peruanos y mexicanos, además de bandas colombianas) ha introducido nuevas modalidades de violencia en el país: secuestros extorsivos, homicidios por encargo (*sicariato*), trata de personas

con fines de explotación sexual y laboral, y extorsión a pequeños comerciantes y empresas constructoras (cobro de “derecho a piso” o *vacunas*) han pasado de ser prácticamente desconocidos a volverse una preocupación diaria para policías y ciudadanos. Un caso estremecedor que evidenció esta nueva realidad fue el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en pleno centro de Santiago en 2023, presuntamente a manos de una célula del TdA que habría actuado por encargo para ajustar cuentas políticas provenientes de Venezuela –un crimen que mostró la extensión transnacional y la sofisticación operativa de este grupo.

Operativos y fortalecimiento legal: En respuesta a la inquietante presencia de estas bandas, las autoridades chilenas han adoptado medidas contundentes. Durante 2025 se aprobó una Ley contra el Crimen Organizado que endurece las penas por pertenencia a asociaciones ilícitas y facilita la expulsión de extranjeros involucrados en delitos graves. En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros realizaron operativos especiales en las zonas más afectadas: por ejemplo, en la región norte (Tarapacá y Antofagasta) –principal puerta de entrada de migrantes y, con ellos, de emisarios de mafias internacionales– se detuvo en febrero de 2026 a decenas de presuntos integrantes del Tren de Aragua, incautándose arsenales de armas de fuego, drogas y dinero en efectivo producto de extorsiones. Dichos operativos, coordinados en algunos casos con las policías de Perú y Colombia (bajo el amparo de Interpol y Ameripol), han permitido desbaratar rutas de tráfico de personas que conectaban Chile con Centroamérica y Estados Unidos. No obstante, la sociedad chilena, acostumbrada a menores tasas de violencia, vive un periodo de alarma: aunque la tasa de homicidios anual (en torno a 4 por 100.000 habitantes) sigue siendo más baja que la media latinoamericana, ha aumentado sostenidamente, al igual que los delitos violentos. Los actos brutales asociados a las bandas extranjeras –como cuerpos desmembrados hallados en Iquique en 2022 o balaceras en barrios populares de Santiago en 2025– han generado una sensación de inseguridad inédita en la población.

El gobierno de Gabriel Boric ha complementado la acción policial con iniciativas preventivas: programas de integración social y laboral para migrantes en situación irregular (buscando reducir la vulnerabilidad que los hace presa fácil de redes criminales), campañas de denuncia anónima de extorsiones y explotación, y cooperación judicial con países vecinos para intercambio de información sobre miembros del TdA y otras mafias. Asimismo, Chile participa activamente en instancias regionales de seguridad para abordar el fenómeno de manera integral. El desafío es significativo: se trata de cerrar el paso a organizaciones transnacionales que se aprovechan de las brechas legales, la amplia frontera desértica y la relativa prosperidad chilena para expandir sus actividades. La situación en febrero de 2026 indica que Chile se encuentra en una carrera contrarreloj: robustecer sus instituciones y su resiliencia social antes de que las bandas importadas echen raíces profundas. La experiencia comparada sugiere que, de no contenerse a tiempo, este tipo de crimen organizado puede enraizarse y transformar de forma duradera el entorno de seguridad local –un escenario que Chile está decidido a evitar mediante una combinación de mano dura inteligente y políticas de prevención.

Perú: Narcoterror Remanente y Nuevas Mafias Transnacionales

El VRAEM y el Sendero Luminoso residual: En Perú, la principal amenaza terrorista tradicional proviene de los remanentes de Sendero Luminoso que todavía operan en la convulsa zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Esta facción, autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) y liderada por los hermanos Quispe Palomino, se ha convertido en un grupo narcoguerrillero que, aunque reducido en número, subsiste dando protección armada a los cultivos de coca y laboratorios de droga en la selva central. Durante 2025, estos remanentes llevaron a cabo emboscadas esporádicas contra patrullas militares (asesinando al menos a una decena de soldados en total) y atentados de hostigamiento con explosivos contra comisarías rurales. En febrero de 2026 no se registraron atentados de alto perfil adjudicados a este grupo, pero su mera presencia mantiene un clima de tensión constante en la región: las operaciones de erradicación de coca se realizan bajo amenaza, y se han documentado casos de comunidades coaccionadas bajo su influencia. La estrategia contrasubversiva del gobierno de Dina Boluarte en el VRAEM se ha mantenido –con patrullajes militares permanentes, interdicción aérea de pistas clandestinas y programas de desarrollo alternativo–, pero la geografía agreste y la connivencia de algunos pobladores con los subversivos han hecho de esta una guerra de baja intensidad, pero prolongada. Los analistas coinciden en que, aunque la capacidad bélica del MPCP es limitada y



difícilmente vuelva a representar una amenaza urbano-terrorista a gran escala, no se puede cantar victoria: el riesgo de un resurgimiento violento persiste mientras queden enclaves donde este narcoterrorismo residual se refugia.

Infiltración de mafias extranjeras y “gota a gota” 2.0: A la par de enfrentar a su viejo demonio subversivo, Perú lidia ahora con nuevas expresiones de crimen organizado transnacional en sus ciudades. En 2025–2026 se han asentado en el país grupos delictivos extranjeros que importan modalidades delictivas particularmente violentas. Nuevamente, el Tren de Aragua (de origen venezolano) destaca como la organización foránea más extendida: sus células en Lima, Callao y otras provincias costeras han introducido prácticas como la extorsión a pequeños negocios mediante granadas, el sicariato por encargo y la trata de mujeres (detectándose redes de explotación sexual de migrantes venezolanas en clubes nocturnos clandestinos). Un fenómeno muy preocupante que tomó relevancia en Lima a comienzos de 2026 es la evolución del préstamo “gota a gota”: esta modalidad de crédito usurero, importada de Colombia, fue utilizada inicialmente por grupos colombianos para lucrar de manera ilegal, pero ha evolucionado a lo que las autoridades peruanas llaman “gota a gota 2.0”. En este esquema, cuando un pequeño comerciante o emprendedor no puede seguir pagando los intereses exorbitantes, los emisarios de la mafia ofrecen “perdonar” la deuda a cambio de favores criminales. Investigaciones periodísticas revelaron chats incautados a cobradores detenidos en enero de 2026 donde estos chantajeaban a sus deudores para que cooperaran: algunos debían ceder sus cuentas bancarias personales para el lavado de dinero del grupo, otros accedían a ocultar drogas o armas en sus viviendas, e incluso hubo casos de padres endeudados que entregaron a sus hijos adolescentes para servir de “mandaderos” del narcotráfico a fin de saldar sus obligaciones. Este tipo de coacción financiera pervierte la naturaleza de la extorsión tradicional, pues convierte a las víctimas en cómplices involuntarios del crimen organizado, ampliando la base social de las mafias y dificultando la persecución penal (ya que las fronteras entre víctima y perpetrador se difuminan). Ante tales hallazgos, el Ministerio Público peruano ha propuesto nuevas figuras delictivas, como sancionar penalmente a quienes alquilen sus cuentas bancarias para actividades ilegales, con el objetivo de castigar a los extorsionadores pero también de desalentar la colaboración de civiles –voluntaria o bajo amenaza– con estas redes.

En resumen, febrero de 2026 mostró a un Perú enfrentando un doble desafío en materia de seguridad: por un lado, consolidar la derrota del terrorismo ideológico de antaño (manteniendo la presión sobre el último reducto senderista en el VRAEM), y por otro, contener la expansión de mafias internacionales que han importado la violencia y los métodos del crimen organizado transnacional a suelo peruano. El éxito en este esfuerzo dependerá tanto de operativos policiales eficientes –incluyendo la coordinación con países vecinos para frenar los flujos criminales– como de políticas de prevención social y fortalecimiento institucional, para evitar que estas organizaciones sigan echando raíces en la sociedad peruana.

Conclusiones

Los hechos ocurridos durante febrero de 2026 confirman que Latinoamérica está inmersa en una nueva generación de amenazas híbridas, donde el crimen organizado adopta cada vez más tácticas de tipo terrorista sin abandonar su afán lucrativo. A su vez, pequeños grupos insurgentes residuales (por ejemplo, disidencias guerrilleras en Colombia o Sendero Luminoso en Perú) se financian y fortalecen mediante actividades criminales, difuminándose la frontera tradicional entre delitos comunes y violencia política. Esta convergencia entre crimen y terrorismo tiene impactos devastadores en la seguridad ciudadana, socava las instituciones democráticas y erosiona la cohesión social en varios países de la región.

De este análisis se desprenden tres tendencias clave:

1. **Difuminación delito–insurgencia:** Grupos criminales latinoamericanos actúan cada vez más como actores pseudo-insurgentes. Su objetivo principal no es tomar el poder del Estado, sino neutralizarlo en zonas específicas para mantener enclaves de impunidad. Cáteles mexicanos (tanto el CJNG como las facciones del Cártel de Sinaloa), pandillas centroamericanas (maras) e incluso bandas sudamericanas como el Tren de Aragua buscan crear espacios donde la autoridad estatal no pueda ingresar ni ejercer

control, replicando patrones de insurrección local. Para ello, emplean tácticas de guerra irregular, desde ataques armados coordinados contra fuerzas de seguridad hasta el uso del terror como medio de control social. Esta situación obliga a los Estados a replantear sus doctrinas de seguridad interna: las policías se enfrentan a amenazas similares a guerrillas urbanas, y los ejércitos –tradicionalmente orientados a amenazas externas– se han visto involucrados en operativos internos de alta intensidad.

2. **Tecnología y profesionalización criminal:** La democratización del acceso a tecnología avanzada (drones, inteligencia artificial, comunicaciones cifradas, criptomonedas) ha permitido que los grupos criminales adquieran capacidades antes exclusivas de los Estados. Por ejemplo, arsenales que solían ser patrimonio de las fuerzas armadas –drones armados, minas antipersonales, lanzacohetes– ahora son usados por cárteles como el CJNG, equiparando su poder de fuego al de pequeños ejércitos y poniendo en jaque a las fuerzas del orden. Estas organizaciones, además, muestran una sorprendente capacidad de aprendizaje e innovación: incorporan especialistas (en explosivos, hacking, finanzas), se nutren de las lecciones de conflictos internacionales (como pudo apreciarse en la adopción de tácticas inspiradas en la guerra de Ucrania para el uso de drones kamikaze en Michoacán) y adaptan rápidamente sus métodos ante la respuesta estatal. El resultado es una carrera contrarreloj en la que, a menudo, los gobiernos se encuentran un paso atrás, reaccionando a innovaciones criminales que se extienden de un país a otro. Por ejemplo, la táctica de los coches bomba –resurgida en Ecuador en 2023– apareció luego en Paraguay (atentado frustrado en Asunción en enero de 2026) y amenaza con replicarse en otros países andinos. Del mismo modo, las campañas de desinformación con *deepfakes*, inauguradas por cárteles mexicanos, han sido detectadas en Centroamérica en contextos de violencia pandilleril.
3. **Respuestas estatales en entredicho:** Los gobiernos de la región han emprendido diversas estrategias para enfrentar estas amenazas híbridas, con resultados dispares y crecientes dilemas. Las medidas de mano dura, como la masiva militarización en México o los regímenes de excepción en El Salvador, demostraron efectividad táctica para retomar el control a corto plazo, pero han sido cuestionadas por posibles violaciones a los derechos humanos y efectos colaterales (encarcelamiento de inocentes, sobrepoblación carcelaria, fortalecimiento de economías ilícitas alternativas). Al mismo tiempo, enfoques más garantistas o tradicionales –reformas policiales, diálogos de paz, mejoras socioeconómicas– avanzan lentamente y sus resultados se ven a mediano y largo plazo, mientras la población exige soluciones urgentes frente a la violencia. En febrero de 2026 quedó patente que los Estados, por sí solos, tienen dificultades para contrarrestar el fenómeno: Haití clama por una intervención internacional ante su anarquía pandillera; los gobiernos de Perú, Chile y Ecuador coordinan esfuerzos para frenar al TdA; México y Estados Unidos comparten inteligencia contra los cárteles; Colombia y Venezuela negocian patrullajes conjuntos en la frontera común para contener la violencia de disidentes y bandas binacionales, etc. La cooperación regional ya no es una opción sino una necesidad imperiosa, dado que el crimen organizado no conoce fronteras y la debilidad de un eslabón pone en riesgo a todos.

Prospectiva Estratégica

Mirando hacia el futuro cercano, se espera que el crimen organizado latinoamericano profundice su carácter híbrido y siga retando a los Estados en múltiples frentes. Varias señales de alerta temprana apuntan a posibles tendencias en 2026–2027: un mayor uso de drones “kamikaze” contra instalaciones gubernamentales o de seguridad (Código CNT-T1c), el regreso de los coches bomba en áreas urbanas de países andinos (CNT-T2b), ataques a infraestructura crítica (refinerías, puentes, sistemas eléctricos) como forma de sabotaje económico (CNT-T4), asesinatos selectivos de alto perfil amplificados con propaganda en redes sociales (CNT-T3, T7), e incluso extorsiones cibernéticas mediante *deepfakes* y clonación de voz, creando caos con información falsa (CNT-T10c). Es razonable anticipar que las organizaciones criminales compartirán y replicarán estas tácticas entre países: por ejemplo, lo observado en México con drones armados podría inspirar acciones similares de pandillas en Centroamérica o de facciones narco en la Amazonía; los métodos de desinformación masiva pueden ser adoptados por maras o bandas en cualquier nación con alto uso de redes sociales.

Para hacer frente a este tipo de amenazas, los Estados de la región deberán evolucionar sus estrategias de seguridad de manera integral. En primer lugar, se necesita desarrollar capacidades estatales “híbridas”



equivalentes a las de los criminales: integrar la ciberseguridad, la inteligencia financiera y la contra-propaganda en el núcleo de la política de seguridad nacional, en lugar de tratarlas como dimensiones separadas. La coordinación internacional efectiva es otro pilar indispensable: el caso del Tren de Aragua, declarado terrorista por EE.UU., abre la puerta a mayor cooperación global –tanto en financiamiento de programas de seguridad como en apoyo técnico e incluso operaciones conjuntas–, pero exigirá calibrar con cuidado la soberanía de cada país y evitar la estigmatización indiscriminada de fenómenos como la migración masiva. Iniciativas como el intercambio de inteligencia en tiempo real, las fuerzas multinacionales de respuesta rápida (por ejemplo, la en formación para Haití) o la asistencia técnica en control de fronteras deben fortalecerse bajo el paraguas de organismos regionales (OEA, Conferencia de Ministros de Seguridad, etc.).

Igualmente, resulta crucial abordar las raíces profundas que alimentan el poder del crimen organizado. Esto implica invertir en prevención social: reducir la pobreza y la desigualdad que facilitan el reclutamiento de jóvenes, mejorar la educación y las oportunidades económicas en comunidades afectadas, y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones para que las poblaciones locales no perciban a las mafias como sus únicas proveedoras de *seguridad* o sustento. Sin una reconstrucción del tejido social –por ejemplo, mediante programas sólidos de reinserción de ex pandilleros, atención a adictos, fortalecimiento de gobiernos locales y protección a líderes sociales–, los éxitos policiales y militares serán efímeros. Como señaló un reciente informe regional, “no se puede derrotar al crimen transnacional solo con balas; es necesario también ganarle los corazones y las mentes a la población”.

En conclusión, febrero de 2026 dejó claro que la seguridad en América Latina se debate en nuevos campos de batalla. El desafío no es únicamente policial o militar: es político, social y tecnológico. Las democracias de la región, para prevalecer, deberán adaptarse a esta era de crimen híbrido mediante una combinación inteligente de fuerza legítima, mejor inteligencia y tecnología, justicia efectiva y, sobre todo, políticas de desarrollo y cohesión social que arrebaten a los grupos criminales el control de los territorios y de las narrativas del miedo. Solo mediante estrategias integrales –que combinen mano firme contra los violentos con el rescate de las comunidades vulnerables y la cooperación internacional– podrá Latinoamérica aspirar a revertir este preocupante ciclo de crimen, terror e impunidad que amenaza con socavar décadas de avance democrático en la región.



Bibliografía

Associated Press. (2019, 14 de noviembre). *En las escuelas de Honduras, las pandillas están al mando*. AP News. <https://apnews.com/article/f87ead82756b49739652601db71c6c43>

Human Rights Watch. (2025, 12 de noviembre). *"You Have Arrived in Hell": Torture and Other Abuses Against Venezuelans in El Salvador's Mega Prison*. Human Rights Watch Report. <https://www.hrw.org/report/2025/11/12/you-have-arrived-in-hell/torture-and-other-abuses-against-venezuelans-in-el>

Infobae. (2025, 7 de noviembre). *La policía desactivó un coche bomba en Quito y atendió una falsa alarma en Guayaquil*. Infobae América – Latinoamérica. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/11/07/la-policia-desactivo-un-coche-bomba-en-quito-y-atendio-una-falsa-alarma-en-guayaquil/>

Infobae. (2026, 22 de febrero). *Decapitaciones filmadas, drones y tanques: todo lo que se sabe de la caída de "El Mencho"*. Infobae México – Narcotráfico. <https://www.infobae.com/mexico/2026/02/23/decapitaciones-filmadas-drones-y-tanques-todo-lo-que-se-sabe-de-la-caida-de-el-mencho-el-capo-narco-mas-temido-de-mexico/>

Kobelinsky, F. (2026, 22 de febrero). *El operativo que terminó con 30 años de criminalidad de "El Mencho"*. Infobae México.

La Opinión. (2026, 22 de febrero). *Ola de violencia sacude a más de 10 estados de México tras la muerte de "El Mencho"*. La Opinión (Los Angeles). <https://laopinion.com/2026/02/22/ola-de-violencia-sacude-a-mas-de-10-estados-de-mexico-tras-la-muerte-de-el-mencho-lider-del-cjng/>

Lake, M. (2025, 4 de enero). *Haiti on the Brink: Gangs, Political Crisis and Foreign Response*. International Crisis Group.

Notimundo. (2026, febrero 22). *Muerte de "El Mencho": el fin del líder del CJNG y la reacción violenta que sacude a cinco estados de México*. Notimundo.

Teleamazonas. (2026, 5 de febrero). *Circula video falso sobre retiro de la Policía en Manabí; autoridades investigan sabotaje*. Teleamazonas (Ecuador).

U.S. Department of State, Office of the Spokesperson. (2026, 20 de febrero). *Foreign Terrorist Organization Designation of Tren de Aragua*. Press Statement, U.S. State Department.

Deutsche Welle (DW). (2026, 22 de febrero). *México: ola de violencia tras muerte de líder del CJNG*. DW Noticias.

Infobae. (2025, 25 de diciembre). *Estos fueron los ataques de "narcodrones" más sonados en México durante el 2025*. Infobae México – Narcotráfico.

La República (Perú). (2026, 8 de enero). *Desarticulan red de préstamos "gota a gota" vinculada a banda extranjera en Lima*. Diario La República.